

Octubre
2011

CONTENIDO

I. Presentación CEDOH	3
I. Percepciones iniciales	5
II. La victoria electoral y los malos augurios	6
III. Los primeros conflictos y definiciones	7
IV. Acciones para liberar el Estado secuestrado	8
V. Crisis institucional y golpe de Estado	10

Las vicisitudes de un reformador en un Estado secuestrado.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de la *Foundation Open Society Institute* (FOSI) y la coordinación y edición del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).

Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión de FOSI.

Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente.

Edición y diagramación:

Miroslava Meza, CEDOH

Impresión:

Impresos Cerrato, octubre 2011

Tegucigalpa, Honduras

PRESENTACIÓN

El presente Documento de Análisis, publicación periódica del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), contiene una descripción valiosa, con sugerentes interpretaciones, del gobierno del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales (enero 2006 – junio 2009), sus rasgos más destacados, sus medidas de gobierno más importantes y, por lo mismo, controversiales y polémicas, a la vez que describe con precisión los retos y desafíos que debió enfrentar para rescatar, reformar y modernizar un viejo aparato estatal hace ya mucho tiempo “secuestrado” por grupos económicos oligárquicos y élites políticas conservadoras, tan atrasadas como voraces.

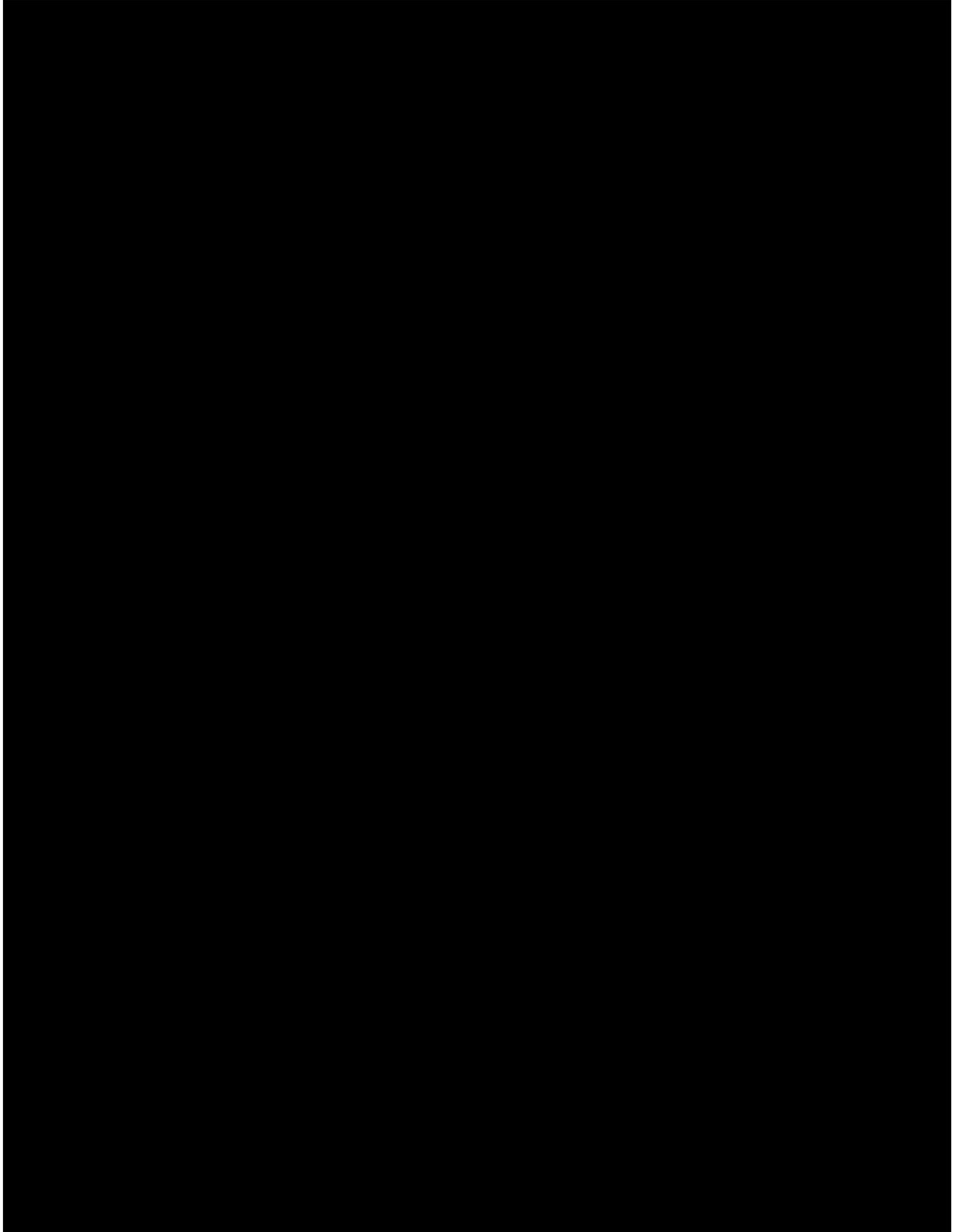
Su autor sabe lo que afirma. Vivió de cerca, mejor decir desde dentro, las vicisitudes y peripecias de todo el periodo gubernamental, desde los inicios de la campaña electoral en 2005 hasta el momento crítico en que se desencadenó el golpe de Estado en junio del año 2009. César Verduga, ecuatoriano/mejicano, político y académico, fue uno de los asesores del candidato Zelaya y posteriormente un diligente colaborador a nivel de consultoría durante el periodo de gobierno. Por lo tanto, conoció de cerca los esfuerzos indecibles del ex Presidente para sacar adelante su proyecto político de “poder ciudadano” y abrir los espacios de un sistema político excesivamente cerrado y excluyente. La búsqueda y articulación de la participación ciudadana, la apertura hacia la inclusión social, el impulso reformista y justiciero que marcaban el quehacer

cotidiano del gobierno zelayista, fueron objeto de permanente observación, análisis e interpretación por parte de Verduga. De igual manera, también compartió con todos nosotros las frustraciones, el momentáneo desencanto y más de alguna cólera contenida ante la oposición desmesurada de las élites político-empresariales y los frustrados esfuerzos gubernamentales por avanzar en el cumplimiento de las metas fijadas.

En este trabajo, escrito poco tiempo después del golpe de Estado, Verduga describe con mucho acierto los peores rasgos del “estado secuestrado”, sus limitaciones y defectos. También nos presenta los intentos, unos más profundos y coherentes que otros, llevados a cabo por los equipos gobernantes para sortear las dificultades, evadir los obstáculos y superar la encarnizada oposición de los llamados “poderes fácticos”, grupos económicos acostumbrados a manejar el estado hondureño como si fuera una finca más o una plantación agrícola de su exclusiva propiedad.

Vale la pena leer este trabajo de César Verduga. El CEDOH, consciente de su valor e importancia, lo publica en su formato tradicional de “Documento de Análisis” y lo pone en las manos de nuestros lectores con la confianza en su segura utilidad y oportuna visión.

Centro de Documentación de Honduras.



LAS VICISITUDES DE UN REFORMADOR EN UN ESTADO SECUESTRADO

César Verduga

PERCEPCIONES INICIALES

Conocí a Manuel (Mel) Zelaya el año 2005 en un hotel de Antigua Guatemala, cuando el entonces candidato a Presidente de Honduras contrataba estrategas de campaña para las elecciones de Noviembre de ese año. La entrevista de carácter profesional que debía durar 30 minutos se prolongó por dos horas y al concluir yo me había incorporado a la política hondureña por los siguientes cuatro años.

Entonces me impresionaron la inteligencia y calidez propios de la personalidad de Mel y su firme decisión de no ser un “presidente más” en la vida de su país. Su principal objetivo era la real democratización de Honduras mediante la participación de sectores populares en la economía y en las decisiones del estado y para ello proponía tres leyes fundamentales: una de participación popular, otra de transparencia informativa y una tercera contra los monopolios que, me dijo, “son enemigos de la economía de libre mercado en la que yo sí creo”.

Me percaté que Mel Zelaya era un reformador que quería recuperar a plenitud lo que en sociología política se llama la “autonomía relativa” del estado.

Pocos días después de la entrevista me instalé en Tegucigalpa y el año 2005 se convirtió para mí en una suerte de taller académico práctico, en el que reflexioné sobre esa realidad histórico-social particular que se llama Honduras.

Me impactó la profundidad, fluidez y parsimonia que había alcanzado el reparto bipartidista del estado hondureño entre liberales y nacionalistas, reparto que alcanzaba todas las instituciones públicas incluida la Universidad y garantizaba gobernabilidad estatal, pero, a la vez, separaba cada vez más al estado de la sociedad y debilitaba crecientemente el arraigo de los partidos políticos en la ciudadanía.

Asistiendo a reuniones sociales en las que se mezclaban empresarios de ambos partidos entendí que ellos pactaban entre si negocios conjuntos y que, además, en el seno del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) la clase política sometía a la previa consideración de los poderes económicos, todas las leyes que el Congreso tramitaba y las principales decisiones que el Ejecutivo tomaba.

Al poco tiempo viví una experiencia esclarecedora de otro aspecto de la captura del estado hondureño. La embajada de Estados Unidos filtró la información de que le había quitado la visa al segundo personero de la fiscalía del estado y el hecho sacudió tanto al país que el Presidente del Congreso y principal adversario electoral de Mel, Porfirio (Pepe) Lobo, regresó apuradamente desde Nueva Orleans, reunió al pleno del Congreso Nacional y éste, por mayoría absoluta, sin escuchar argumentaciones de la víctima, ni pedirle explicaciones a la representación diplomática extranjera, destituyó al alto funcionario. Entendí que la Embajada de Estados Unidos era “el poder detrás del trono” en el estado hondureño y que en las élites del país perder la visa norteamericana equivalía a convertirse en ciudadano de segunda clase.

Monitoreando los medios de comunicación y analizando información diversa para cumplir mejor con mi trabajo de asesor político, constaté la dependencia de Honduras de la cooperación financiera y técnica internacional que, en los hechos, además de trasladar recursos a un país necesitado de ellos, obstruía una definición nacional lógica y coherente de objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo. Cada agencia del sistema de Naciones Unidas, de la estructura de Bretón Woods o de la cooperación bilateral de gobiernos de Norteamérica, Europa o Asia o de Iglesias u ONGS internacionales, era portadora de su propia visión y agenda e insertaba “sus proyectos” en el Presupuesto del Estado o en los presupuestos de las ONGS hondureñas, sin que necesariamente esas cooperaciones estuvieran enmarcadas en políticas y programas diseñados para alcanzar objetivos nacionales de largo plazo.

Estudí la Constitución del país y, en silencio, varios años antes de los pronunciamientos hoy

Las vicisitudes de un reformador en un Estado secuestrado

públicos y famosos del Presidente Oscar Arias o de José Miguel Insulza, la catalogué como un verdadero adefesio antihistórico porque a) no permite zanjar en democracia los grandes dilemas de la nación como el enjuiciamiento político del Presidente o la reestructuración de los otros poderes del estado ante una crisis institucional y b) su rigidez constriñe la soberanía popular hasta el extremo de considerar traición a la patria cualquier aspiración de cambiar el sistema de gobierno.

Con esas piezas armé para mi entendimiento el rompecabezas de un estado hondureño secuestrado por una estructura de poder anacrónica, respaldada por una Constitución petrificada, insensible a la dinámica histórica.

Un estado secuestrado carece de la autonomía necesaria para cumplir su misión fundamental que es procurar el bien común y, en el contexto de las nuevas amenazas en un mundo globalizado, es candidato a convertirse en estado fallido.

Ese secuestro del estado en Honduras se expresaba en las dos dimensiones fundamentales de cualquier estado: la estratégica y la técnico-instrumental.

En la dimensión estratégica los principales actores del secuestro eran: 1) la Embajada de Estados Unidos, potencia mundial que era y es el principal mercado de las exportaciones hondureñas, el mayor proveedor de sus importaciones y que posee allí una base militar 2) las grandes familias que en un número no mayor de treinta controlaban los medios de comunicación y los principales contratos del estado, así como bancos, aseguradoras, comercios, industrias, propiedades agrícolas, Universidades privadas y clubes deportivos 3) los Partidos Liberal y Nacional que, como clase política, se repartían el Estado Nacional para servir a sus intereses partidistas y a los intereses corporativos de las grandes familias, así como para garantizar la reproducción de la pertenencia del país a la órbita de influencia económica, política, cultural y diplomática de Estados Unidos.

En la dimensión técnico-instrumental el estado hondureño estaba capturado por: 1) la cooperación internacional y 2) la alta tecnoburocracia que ante la ausencia de la estabilidad que otorga un Servicio Profesional de Carrera,

tenía que cimentar su poder en la vinculación con las cúpulas políticas y empresariales.

Liberar a un estado de semejante secuestro para recuperar su autonomía, pensé, no será asunto de cuatro años, pero valía la pena empezar y para eso había que ganar las elecciones, tarea a la que traté de contribuir con entusiasmo y dedicación.

LA VICTORIA ELECTORAL Y LOS MALOS AUGURIOS

El 27 de Noviembre del 2005 a las 20 h., José Manuel Zelaya Rosales, era declarado ganador de las elecciones por una encuesta a boca de urna contratada por la cadena de televisión más importante del país. Lo mismo hizo horas después el Tribunal Supremo Electoral y la misión de observadores de la O.E.A. en base al programa de resultados preliminares.

El candidato del Partido Nacional (que controlaba el Poder Ejecutivo) Pepe Lobo, quien fungía de Presidente del Congreso Nacional, se negó a aceptar su derrota hasta que los escrutinios confirmaran esas tendencias, cosa que recién ocurrió 10 días después.

Esa violación del rito tradicional del bipartidismo que suponía el rápido reconocimiento de los resultados electorales se debía, según los rumores de Tegucigalpa, a que Pepe Lobo había sido presionado por importantes sectores de las familias todopoderosas que deseaban arrinconar a Mel y obligarlo a negociar algunos aspectos de su futuro gobierno.

En primer lugar les preocupaba el tema de la participación ciudadana institucionalizada como mecanismo fundamental para combatir la corrupción y reducir la pobreza. También tenía aprehensiones respecto del papel que jugarían en el próximo gobierno los integrantes del grupo de dirigentes con los que Mel conformó una tendencia que ganó las internas en el Partido Liberal y desplazó a una generación de líderes envejecidos en años e ideas.

Y es que en esa tendencia lo predominante era una concepción progresista, que consideraba al Partido Liberal de Honduras en el siglo XXI, como un heredero del Liberalismo revolucionario del siglo XIX y del reformismo social del siglo XX y no un representante del neoliberalismo de los años 90s.

Para ese grupo los símbolos históricos del liberalismo hondureño eran Morazán y Cabañas en el siglo XIX, el primero símbolo y mártir de la integración centroamericana y el segundo un ejemplo histórico de probidad en el ejercicio del poder, y en el siglo XX líderes de corte reformista como Zúñiga Huete, Villeda Morales y Rodas Alvarado.

En esa corriente participaban intelectuales críticos y artistas contestatarios que durante años habían denunciado el secuestro del estado y la necesidad de liberarlo para ponerlo al servicio de la nación y sus grandes mayorías.

En esta ocasión la presión de las grandes familias no prosperó porque el gobierno de Estados Unidos no la acompañó y Pepe Lobo no puso más obstáculos para reconocer su derrota. Pero las luces rojas quedaron encendidas y los llamados “dueños de Honduras” se prepararon para una permanente acción de vigilancia crítica cargada de sospechas, suspicacia y malos augurios para el nuevo gobierno.

LOS PRIMEROS CONFLICTOS Y DEFINICIONES

Después del triunfo electoral Mel Zelaya envió al Congreso dos de sus leyes fundamentales: la de Participación Popular y La de Transparencia y Acceso a la información pública, aspirando a que fueran aprobadas antes de su juramentación

La primera fue aprobada rápidamente y sirvió tres años y medio después para la convocatoria a la encuesta sobre una potencial Asamblea Constituyente que detonó el golpe de estado del 28 de Junio.

La segunda, en cambio, demoró muchos meses y fue aprobada con uñas recortadas y dientes reblandecidos, después de un escrutinio cuidadoso de todos los poderes familiares económicos y mediáticos, de las Iglesias y de los factores de poder extranjeros.

En el discurso de inauguración el Presidente Zelaya esbozó la filosofía de un gobierno al servicio de los más pobres, comprometido con el medio ambiente, la educación y la salud pública, la plena soberanía de Honduras en su política exterior y el impulso a la integración centroamericana.

Como medidas concretas anunció la entrega del 1% del Presupuesto Nacional para cuidar el bosque y el financiamiento de la plena gratuidad de la enseñanza incluyendo la merienda escolar para todos los niños.

En sus primeros días de labores en el despacho presidencial recibió la visita del entonces Embajador de Estados Unidos en el gobierno de Busch Sr. Charles Ford quien le solicitó un pasaporte hondureño para el terrorista Posada Carriles o, en su defecto, un asilo político, pedidos que fueron denegados por primera vez en la historia de Honduras, porque Posada Carriles había vivido en Tegucigalpa en varias ocasiones, circulando por Centroamérica con pasaporte hondureño. Esa negativa al pedido norteamericano fue el inicio de una relación marcada por muchos desencuentros y pocas avenencias.

El informe público sobre la situación en que había recibido el país, sirvió para que el Presidente Zelaya delineara con más claridad su concepción de gobierno.

Al régimen anterior, presidido por Ricardo Maduro, le había tocado culminar el proceso HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados) de condonación de la deuda, iniciado por gobiernos anteriores. Esa culminación incompleta, (porque quedó pendiente la deuda BID de 1500 millones de dólares cuya condonación fue negociada por el Gobierno de Zelaya), fue promovida por Maduro y el Partido Nacional como la prueba de un gobierno exitoso en lo económico y social, con la metáfora mediática de que “dejaban la mesa servida” para el nuevo gobierno.

En realidad la economía en el gobierno anterior había crecido pero de manera insuficiente para las necesidades de un país que tenía acumulados rezagos históricos enormes. A pesar de la inversión de más de 2000 millones de dólares de fondos extranjeros en la Estra-

tegia de Reducción de la Pobreza (ERP), los pobres habían aumentado en 200.000 en cuatro años, producto de una estrategia macroeconómica que no privilegiaba el crecimiento y el empleo y, también, a causa del gasto excesivo de los fondos de la ERP en la burocracia anti-pobreza en detrimento de la inversión a favor de los pobres.

Además, el gobierno de Maduro había incrementado en tres ocasiones los impuestos para sostener el gasto público sin mejorar la recaudación y había exprimido para necesidades del gobierno a las principales empresas estatales la telefónica (HONDUTEL) y la de energía eléctrica (ENEE), dejándolas en situación precaria, propicia a su privatización, cara ambición de las treinta familias todopoderosas.

Mel Zelaya cerró su informe sobre el estado en que recibía la hacienda pública con algunas definiciones claras: la economía debía crecer más y generar empleos, los paquetazos tributarios debían ser sustituidos por un salto en la recaudación, las empresas estatales tenían que ser defendidas y saneadas y la lucha contra la pobreza debía tener nuevos enfoques.

ACCIONES PARA LIBERAR AL ESTADO SECUESTRADO

Las decisiones reformadoras abarcaron en el primer, segundo y tercer año del gobierno de Zelaya un amplio espectro de la acción del estado en su dimensión estratégica y en su dimensión técnico-operativa.

En la dimensión estratégica, en relación con Estados Unidos, además de negarse a los “trabajos sucios” tipo Posada Carriles que los gobiernos hondureños habían realizado tradicionalmente, el nuevo gobierno liberó sus votaciones en la ONU que antes estaban amarradas a las norteamericanas y no planteó la salida de las tropas de Estados Unidos, pero sí la conversión de la pista de la base militar de Palmerola o Soto Cano en un aeropuerto comercial, dada la conocida precariedad de la pista de Toncontín en Tegucigalpa. Adicionalmente, nombró un Embajador en Cuba para hacer efectivas las relaciones diplomáticas que ya existían, pero que eran solo formales por parte de Honduras al carecer ese país de un Embajador en La Habana

En materia económica, Mel Zelaya volvió al gobierno activo protagonista del crecimiento, usando los abundantes papeles estatales que se transaban en el mercado financiero, como mecanismo para reducir las tasas de interés, desalentar las ganancias especulativas de los bancos y estimularlos a prestar para la inversión productiva. El resultado fue un crecimiento de 6% y 7% en el 2006 y el 2007, con un incremento del empleo en más de 200.000 plazas. En ese mismo período las recaudaciones tributarias tuvieron un crecimiento espectacular y elevaron la relación tributos/PIB del 15% al 20%.

Para mejorar la competitividad de la economía hondureña Mel Zelaya revisó los convenios existentes con transnacionales que comercializaban en condiciones leoninas los combustibles y logró cambiar la fórmula de cálculo de sus costos y bajar el precio final de los carburantes.

Igualmente replanteó los términos de varios convenios del estado con algunas de las familias todopoderosas como el grupo de los llamados “térmicos” que controlaban el abastecimiento de combustible para algunas de las generadoras estatales de energía, así como con el corporativo que administraba los aeropuertos. En todos estos casos los contratos existentes eran verdaderos arquetipos de cómo funciona un estado secuestrado y un “capitalismo de amiguetes” parafraseando a Stiglitz.

En otro campo el Presidente vetó un proyecto de Ley aprobado por el Congreso en materia de Comunicación que permitía concentrar aún más en pocas manos el control del espacio radioeléctrico.

Esa decisión endureció el enfrentamiento de los medios con el Gobierno y llevó a Zelaya a acelerar la creación de un espacio público de comunicación con la fundación de un semanario y un canal de televisión, además del fortalecimiento de la Radio Nacional, medidas que ensancharon los espacios de liberación del estado hondureño de su secuestro por grupos privados de interés.

En el campo de la educación el gobierno del Poder Ciudadano transformó a Honduras en el país con mayor gasto en educación de América Latina, asignando al rubro sumas equiva-

Las vicisitudes de un reformador en un Estado secuestrado

lentes al 9 % del PIB y al 38% del Presupuesto, lo que unido a la asignación del 1% del Presupuesto para cuidar el bosque significaron un giro en las prioridades del estado hondureño.

En la dimensión técnico-operativa del estado, liberarlo de su secuestro implicaba replantear las relaciones con la cooperación internacional y en ese aspecto el gobierno de Mel Zelaya tuvo buenos y malos momentos.

Un gran éxito fue la condonación de la deuda con el BID.

Un mal momento fue no poder vencer la resistencia de las agencias cooperantes para alcanzar la meta de alinear los múltiples proyectos sociales de la cooperación, de acuerdo con prioridades definidas por el gobierno en programas que permitieran buscar metas de largo plazo. Otro fue la presión del FMI en el tercer y cuarto año a favor de una devaluación, que el gobierno se negó a implementar, pero que se convirtió en objeto de un permanente golpeteo mediático impulsado por los “dueños de Honduras”.

En el sector agroalimentario el gobierno hondureño tuvo una confrontación inicial con la banca internacional de desarrollo, respecto del enfoque estratégico del sector. Con acuerdo del gobierno de Maduro, los bancos habían definido como política hacia Honduras el apoyo exclusivo a la transformación de los campesinos pobres de productores de granos básicos a productores de verduras y frutas, con el fin de funcionalizar la agricultura hondureña a las necesidades y potencialidades del mercado norteamericano en el contexto del CAFTA.

Pero los frijoles y el maíz son el sustento alimenticio diario de los campesinos y el gobierno de Zelaya decidió que si bien era correcto impulsar la transformación productiva, esto debía hacerse manteniendo el apoyo a la producción alimentaria tradicional para garantizar la dieta básica de los campesinos.

Sin financiamiento de la banca internacional de desarrollo, Mel Zelaya lanzó su programa de Bono Tecnológico para apoyar el mejoramiento productivo en la agricultura tradicional.

El éxito del Bono Tecnológico y la crisis alimenticia que se dibujó en el mundo en los años 2007-2008 le dieron la razón al gobierno hondureño y la

banca internacional de desarrollo terminó rindiéndose ante las evidencias y realineando sus prioridades.

Otro hecho semejante fue la creación de la Red Solidaria dirigida por la Primera Dama, que se dedicó a atender directamente a los más pobres de manera focalizada, sin exceso de burocracia. Al principio esa iniciativa tuvo la resistencia de la cooperación internacional, pero al segundo año los resultados reconocidos por la CEPAL de una reducción del 9% de la pobreza, terminaron con las suspicacias y dudas respecto del programa y las agencias internacionales volcaron su apoyo al mismo.

El más potente mensaje en relación con el objetivo de construir un estado al servicio del conjunto de la sociedad, fue el proceso de elaboración de un Plan de Nación a 25 años, realizado en el 2007 por iniciativa del Presidente Zelaya, que implicó en la práctica el relanzamiento, con nuevo estilo, de la planificación pública enterrada por las políticas neoliberales en los años 90s.

El Plan se elaboró de abajo hacia arriba con la participación de más de 500 organizaciones sociales y recogió en sus trece capítulos y cinco proyectos de ley, la imagen-objetivo del país que las y los hondureños aspiraban a construir hacia el futuro en un estado liberado de sus secuestradores.

En el tercer año de su gobierno Mel Zelaya enfrentó la crisis mundial de los combustibles y alimentos afiliando a Honduras a Petrocaribe y al ALBA, lo que implicó un parteaguas en la posición geoestratégica del país en el hemisferio occidental. Pero gracias a esas decisiones Honduras logró crecer aún al 4% en el 2008.

A fines del 2008 se produjo el enfrentamiento más duro del Presidente con los grupos de poder.

De acuerdo con la ley, en Honduras el salario mínimo lo establecen de común acuerdo los empresarios y los trabajadores, pero si no hay acuerdo el Poder Ejecutivo debe decidir.

En el país se desarrollaba una discusión sobre si el salario mínimo debía ajustarse de acuerdo a la inflación del año anterior o si el principio debía ser el costo de la canasta básica,

porque los salarios arrastraban un rezago histórico.

Mel Zelaya había aplicado ya el principio del costo de la canasta básica para ajustar los salarios más bajos del sector público.

La miopía de los empresarios hondureños los llevó a negarse a la modesta subida que pedían los trabajadores y la negociación se empantanó, quedando en manos del Presidente la solución.

Un jefe de estado no puede aplicar un criterio en el sector público y otro distinto en el sector privado para medir algo tan importante como el salario mínimo. El resultado fue que el salario mínimo en el sector privado se fijó en el mismo nivel que en el estado, aunque con algunas medidas de amortiguamiento para las empresas pequeñas.

Para algunos analistas este fue el momento en que las grandes familias decidieron derrocar a Zelaya, a pesar de que ya estaban definidas las candidaturas presidenciales para el 2009 y que los presidenciables nacionalista y liberal eran garantía plena para los poderes fácticos y los Estados Unidos de que la reforma zelayista no tendría continuidad en el período 2010-2014.

Sean ciertas o no tales aseveraciones, lo que los hechos han demostrado posteriormente, es que el bloque golpista conspiró durante varios meses y que, entre los complotados, se gestaron distintos proyectos de asalto al poder, con diferentes estilos y metodologías.

CRISIS INSTITUCIONAL Y GOLPE DE ESTADO

En algunos círculos políticos e intelectuales de América Latina provoca confusiones el hecho de que el golpe militar ejecutado por un grupo de élite de las Fuerzas Armadas, que plagió a un Presidente electo democráticamente sacándolo de su casa en pijama para expulsarlo a otro país, haya tenido posteriormente el apoyo de otras instituciones como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Procurador Nacional de Derechos Humanos.

Esa incompreensión se origina en el desconocimiento de cómo funciona la institucionalidad hondureña, bajo la égida de una estructura de poder que tiene secuestrado al estado.

Las elecciones de Presidente, Diputados y Alcaldes en Honduras se dan conjuntamente cada cuatro años, lo que significa que la representación política queda congelada hasta que ocurran nuevas elecciones.

El Congreso Nacional es el encargado de elegir a la Corte Suprema, al Fiscal y al Procurador de Derechos Humanos y a otros titulares de instituciones del estado, y lo hace en contacto permanente con los factores reales de poder que instrumentalizan al estado bajo su captura y las autoridades así designadas son leales a quienes los escogen y no a las leyes o al interés público.

Cuando el Presidente de la República forma parte de los secuestradores del estado o se subordina a ellos, entonces la cadena de mando funciona aceitadamente y no hay crisis institucional, como había ocurrido en treinta años de democracia representativa hondureña.

Pero esa no fue la oferta electoral ni la conducta en el poder de Mel Zelaya.

Y esa actitud distinta, hizo que todos los poderes del estado, desde mediados del tercer año de su gobierno comenzaran a acosarlo, en una acción combinada con los medios de comunicación, el sector empresarial y, menos evidentemente, la embajada de Estados Unidos. El asunto alcanzó extremos de escándalo cuando la Corte Suprema de Justicia no permitió el uso de tanques de almacenamiento de combustibles de un empresario privado al que se le pagaría un justiprecio dejando al país al borde del desabastecimiento energético. O cuando ese mismo poder del estado bloqueó una medida de regulación de la circulación de coches en las ciudades hondureñas, que tenía como objetivos mejorar el medio ambiente y ahorrar gasolina.

Por ello, en su cuarto año de gobierno, Zelaya planteó redefinir las fuentes generadoras del poder público, proponiendo abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente que en el 2010, bajo un nuevo Presidente y un nuevo Congreso democráticamente electos en el 2009, pudiese reconfigurar el marco constitucional hondureño. Ese fue el proyecto conocido como “cuarta urna”

Uno de los temas de ese cambio constitucional que debía ocurrir en el 2010, seguramente sería el del proceso de gestación y estructuración de la representación política y de la selección de los titulares de las instituciones del estado, para llevar a Honduras, en el 2014, hacia una democracia superior en la que los ciudadanos tuviesen mecanismos de participación más allá de la sola emisión del voto en las urnas cada cuatro años.

Mel Zelaya no fue el único que se rebeló contra la corrupta estructura de poder que controla al estado y asfixia a la sociedad. En el año 2008 un grupo de fiscales llevó adelante una huelga de hambre que duró varias semanas, reclamando que las autoridades superiores le dieran trámite legal a numerosos juicios por estafas al estado, que, contra algunas de las treinta familias, se habían incoado en los últimos 20 años y que invariablemente corrieron el destino de ser engavetados por los distintos titulares que habían desfilado por el Ministerio Público.

Los huelguistas de hambre solo pudieron recibir el apoyo moral del Presidente Zelaya y el activo respaldo de la sociedad civil organizada. El Procurador Nacional de Derechos Humanos jamás se pronunció siquiera, ni para guardar las formas. Pero, lo más importante, la huelga de hambre terminó y los juicios continúan engavetados esperando que ocurra su prescripción legal.

Es pertinente recordar para analizar el tema hondureño, que el caso de un golpe militar con respaldo de otras instituciones del estado contra un Presidente reformador que luchaba por la equidad, ya había ocurrido antes en América Latina.

Salvador Allende fue derrocado y asesinado con el respaldo inicial a los golpistas por parte del andamiaje institucional del estado chileno, incluyendo Congreso y Corte Suprema de Justicia.

El golpe de Pinochet se ejecutó precisamente cuando el Presidente se disponía a convocar a un plebiscito para que el pueblo decidiese sobre algunos temas altamente conflictivos, engendrados en el proceso político que Allende lideraba.

En el caso de Honduras la situación previa al golpe no registró el grado de polarización que conoció Chile en el 72-73. Pero, impulsar un cambio necesario para luchar con éxito contra la desigualdad, pasaba por terminar con el secuestro

del estado hondureño y quien lo intentó fue derribado.

En el derrocamiento de Mel Zelaya participaron todos los secuestradores del estado hondureño y quienes, por delegación de ellos, ejercían las funciones de administradores de las instituciones del estado.

No puede escapar al análisis que los papeles de los distintos actores del golpe fueron diferentes y no siempre coincidieron en los métodos.

Las declaraciones, publicadas en la prensa, hechas por un político golpista de nombre Felícito Ávila, candidato presidencial por la Democracia Cristiana, señalan claramente que las grandes familias y los medios instigaron el golpe durante meses y que el Embajador de Estados Unidos conocía perfectamente los planes desestabilizadores.

Otras hipótesis apuntan a señalar que había un modelo de golpe compartido por las grandes familias, la embajada norteamericana y los políticos, que debía ocurrir el 29 de Junio, un día después de la encuesta por la cuarta urna, y debería llenar ciertas formalidades seudolegales.

El Congreso se encargaría de destituir al Presidente y solicitaría a las Fuerzas Armadas y a la Policía su apresamiento junto a su gabinete, en base a un informe que presentarían la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, acusando a Zelaya de violaciones constitucionales y legales

Pero, según esa hipótesis, un pequeño grupo empresarial de las grandes familias consideró que el golpe parlamentario corría el riesgo de empantanarse. Sus asesores legales les demostraron que era imposible con la Constitución hondureña destituir al Presidente. Y sus asesores políticos les hicieron notar que la abrumadora mayoría que obtendría el proyecto de la cuarta urna en la encuesta del 28 de Junio, podría paralizar a algunos diputados comprometidos con el golpe.

Ese núcleo de “duros” de las treinta familias habría entonces decidido optar por otro camino: el de sobornar al Estado Mayor de las

Fuerzas Armadas para adelantar el golpe y ejecutarlo el 28 de Junio.

zigzagueante comportamiento de Washington en la crisis hondureña. Sería también el sustento a las “explicaciones” del jefe golpista Gral. Vásquez Velásquez, quien le habría expresado al Presidente Zelaya telefónicamente que los militares le salvaron la vida, porque las instrucciones que tenían incluían su asesinato. ¿Instrucciones de quien? si en la madrugada del 28 de Junio el único Comandante General de las Fuerzas Armadas era Mel Zelaya...

Allende fue asesinado y Mel Zelaya no. Sus proyectos y personalidades son diferentes. Allende lideraba una propuesta de transformación pacífica hacia el socialismo. Mel Zelaya lidera un proceso que impulsa un capitalismo moderno, con rostro humano. Allende era masón y marxista. Mel Zelaya es católico y adhiere al liberalismo social. Pero ambos tienen en común la lucha por la equidad social y ambos fueron derrocados por un golpe militar, instigado por fuerzas nacionales y transnacionales,

Eso explicaría, según los que sostienen esta hipótesis, la reacción negativa del Embajador Llorens (sustituto de Charles Ford) a las acciones cumplidas el 28 de Junio y, también, el El tema de Honduras se inscribe en una problemática mayor, que toca a la matriz cultural que ha hecho de América Latina el continente más desigual del mundo. De lo que se trata es de si la democracia latinoamericana puede ser capaz de generar formas equitativas de convivencia o si sus estructuras institucionales solo pueden sobrevivir garantizando la reproducción permanente de una desigualdad que es económica, social, de ausencia de participación y de no acceso a la representación y a la toma de decisiones en el estado por parte de las vastas mayorías que conforman los estratos sociales medios y pobres del subcontinente.

Por eso es que la lucha sin descanso del pueblo hondureño contra la dictadura y por la restitución de su Presidente, así como el ingreso clandestino de Mel Zelaya a hospedarse en la embajada de un país emblemático como Brasil para continuar liderando la demanda de cambio en su patria, forman parte de procesos políticos renovadores que están en marcha y que desbordan los límites de Honduras.